

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD

Bogotá, D.C., Siete (07) de febrero del año dos mil veintitrés (2023)

REF: REVISIÓN DE SENTENCIA DE INTERDICCIÓN

DTE: SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA

RAD: 2010-00823

DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

PRIMERO: se nombre apoyo judicial de SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA a la señora MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR.

TRAMITE PROCESAL

Recibida la solicitud de revisión se avocó conocimiento mediante auto del 21 DE ABRIL DE 2022, se ordenó la valoración de apoyos de la señora SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA y las declaraciones de SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA y MIRIAM BONILLA

Una vez se aportó la valoración de apoyos realizada por la defensoría del pueblo se ordenó correr traslado y mediante auto del 30 de noviembre de 2022 se citó a audiencia presencial en las instalaciones del despacho con el fin de practicar las pruebas y proferir el fallo que en derecho corresponde, citando a la señora MIRIAM BONILLA FAJARDO, DANIEL SAMUEL GUERRERO MORENO, JOSE LUIS GUERRERO MORENO y MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR

LA ACCIÓN

La Ley 1996 de 2019, derogó las normas existentes respecto a la discapacidad mental y el remedio que hasta ese momento había brindado la legislación nacional, que no era otro que la interdicción de derechos de la persona con discapacidad, a quien se le designaba un Curador que lo representara y garantizara el goce efectivo de sus derechos.

Con la nueva Ley 1996 de 2019, se cambia el paradigma del tratamiento de la discapacidad, adecuando la normativa nacional a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, imponiendo dicha ley una serie de obligaciones de reglamentación al Gobierno Nacional y por ende, estableciendo un periodo de transición entre la expedición de la ley y la fecha en la cual, según el legislador, debe estar lista la reglamentación e implementado todo el sistema interinstitucional de valoración de apoyos y capacitación.

La Corte Suprema de Justicia, en Auto AC-253 de 2020, señaló que: “La ley 1996 de 2019 optó por el modelo social de regulación de los aspectos atinentes a las personas mayores de edad con discapacidad, pues ya no concibe este tipo de sujetos como improductivos o ajenos al funcionamiento de la sociedad (modelo de prescindencia) ni mucho menos enfermos o demandantes de curación médica (rehabilitador), sino como personas que pueden servir a la sociedad...”

El artículo 3 de la señalada Ley, explica qué son los apoyos y los define como: Apoyos. Los apoyos de los que trata la presente ley son tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales.

Por su parte, el ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS. Los siguientes principios guiarán la aplicación y la interpretación de la presente ley, en concordancia con los demás principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de garantizar la efectiva realización del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad.

1. Dignidad. En todas las actuaciones se observará el respeto por la dignidad inherente a la persona con discapacidad como ser humano.

2. Autonomía. En todas las actuaciones se respetará el derecho de las personas a autodeterminarse, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a su independencia y al libre desarrollo de la personalidad conforme a la voluntad, deseos y preferencias propias, siempre y cuando estos, no sean contrarios a la Constitución, a la ley, y a los reglamentos internos que rigen las entidades públicas y privadas.

3. Primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico. Los apoyos utilizados para celebrar un acto jurídico deberán siempre responder a la voluntad y preferencias de la persona titular del mismo. En los casos en los que, aun después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles, no sea posible establecer la voluntad y preferencias de la persona de forma inequívoca, se usará el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, el cual se establecerá con base en la trayectoria de vida de la persona, previas manifestaciones de la voluntad y preferencias en otros contextos, información con la que cuenten personas de confianza, la consideración de sus preferencias, gustos e historia conocida, nuevas tecnologías disponibles en el tiempo, y cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto.

4. No discriminación. En todas las actuaciones se observará un trato igualitario a todas las personas sin discriminación por ningún motivo, incluyendo raza, etnia, religión, credo, orientación sexual, género e identidad de género o discapacidad.

5. Accesibilidad. En todas las actuaciones, se identificarán y eliminarán aquellos obstáculos y barreras que imposibiliten o dificulten el acceso a uno o varios de los servicios y derechos consagrados en la presente ley.

6. Igualdad de oportunidades. En todas las actuaciones se deberá buscar la remoción de obstáculos o barreras que generen desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad.

7. Celeridad. Las personas que solicitan apoyos formales para tomar decisiones jurídicamente vinculantes, tienen derecho a acceder a estos sin dilaciones injustificadas, por lo que los trámites previstos en la presente ley deberán tener una duración razonable y se observarán los términos procesales con diligencia.

La Corte Constitucional en sentencia T-352 de 2022, señaló:

En síntesis, el modelo social como un nuevo paradigma de comprensión de la discapacidad, trae consigo un cambio sustancial en la garantía y goce de los derechos fundamentales. El Estado colombiano ha reconocido la

especial protección de la población con discapacidad, pero en la última década, con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ha reforzado su protección desde una perspectiva social, y en consecuencia, las medidas legislativas y la jurisprudencia constitucional, han consolidado una inclusión real y efectiva en los diferentes sectores de la sociedad, como por ejemplo, el reconocimiento a la capacidad legal, el acceso a la educación, entre otros. Por su parte, un asunto trascendental en este cambio de paradigma es el reconocimiento de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Como se presentará en el siguiente acápite, Colombia realizó el avance más relevante en esta materia con la expedición de la Ley 1996 de 2019

Y concluye la Corte que:

se puede señalar que luego de la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y los cambios legislativos que incorporan el modelo social de discapacidad al ordenamiento interno, como lo es la Ley 1996 de 2019, se exige el reconocimiento de la autonomía e independencia de esta población. Acorde con ello, hoy la ley presume la capacidad legal de las personas con discapacidad. Este reconocimiento implica que todas las autoridades estatales deben garantizar el goce y ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad de condiciones al resto de la población. No obstante lo anterior, no pueden desconocerse las medidas adecuadas y efectivas para garantizar la igualdad material, es decir, el sistema de apoyos que trae la Ley 1996 de 2019, que reconoce la diversidad funcional de las personas con discapacidad y, por tanto, contempla distintas formas de realizar los ajustes razonables idóneos para garantizar el ejercicio de sus derechos.

A partir del 26 de agosto de 2021 entró en vigor el capítulo V de la Ley 1996 de 2019.

En efecto, el artículo 37 de la precitada ley establece el procedimiento que debe adelantarse cuando la adjudicación de apoyos es adelantada por la persona titular del acto jurídico.

Ahora bien, el artículo 38 ibídem, prevé el trámite de adjudicación de apoyos para la toma de decisiones cuando es promovida por persona distinta a la titular del acto jurídico.

Este trámite es un proceso verbal sumario especial, con las reglas específicas delimitadas en el citado artículo, y establece entre otras cosas que La demanda solo podrá interponerse en beneficio exclusivo de la persona con discapacidad. **Esto se demostrará mediante la prueba de las circunstancias que justifican la interposición de la demanda, es decir que a) la persona titular del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible, y b) que la persona con discapacidad se encuentre imposibilitada de ejercer su capacidad legal y esto conlleve a la vulneración o amenaza de sus derechos por parte de un tercero.**

Así mismo, la norma indica que para proferir el fallo que en derecho corresponda, es necesario contar con una valoración de apoyos en la que deberá consignarse como mínimo:

a) La verificación que permita concluir que la persona titular del acto jurídico se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible.

b) Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía en las mismas.

c) Las personas que pueden actuar como apoyo en la toma de decisiones de la persona frente al acto o actos jurídicos concretos que son objeto del proceso.

d) Un informe general sobre la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico que deberá tener en consideración, entre otros aspectos, el proyecto de vida de la persona, sus actitudes, argumentos, actuaciones anteriores, opiniones, creencias y las formas de comunicación verbales y no verbales de la persona titular del acto jurídico.

Finalmente, el artículo 56 de la Ley 1996 de 2019 señala:

PROCESO DE REVISIÓN DE INTERDICCIÓN O INHABILITACIÓN. *En un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Capítulo V de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicción o inhabilitación deberán citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicción o inhabilitación anterior a la promulgación de la presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos.*

En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez de familia que adelantó el proceso de Interdicción o inhabilitación. Recibida la solicitud, el juez citará a la persona bajo medida de interdicción o inhabilitación, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos.

En ambos casos, el juez de familia determinará si las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación requieren la adjudicación judicial de apoyos, de acuerdo a:

1. La voluntad y preferencias de las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley. Por lo anterior, la participación de estas personas en el proceso de adjudicación judicial de apoyos es indispensable so pena de la nulidad del proceso, salvo las excepciones previstas en la presente ley.

2. El informe de valoración de apoyos, que deberá ser aportado al juzgado por cualquiera de los citados a comparecer según lo dispuesto en el presente artículo, en el plazo que el juez disponga, y en todo caso, antes de la fecha señalada para comparecer ante el juzgado. En caso de que los citados a comparecer aporten más de un informe de valoración de apoyos, el juez deberá tener en consideración el informe más favorable para la autonomía e independencia de la persona, de acuerdo a la primacía de su voluntad y preferencias, así como las demás condiciones establecidas en el artículo [13](#) de la presente ley.

El informe de valoración de apoyos deberá consignar, como mínimo:

a) La verificación que permita concluir, cuando sea el caso, que aún después de haber agotado todos los ajustes razonables y apoyos técnicos disponibles, la persona bajo medida de interdicción o inhabilitación se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio posible.

b) Los apoyos que la persona requiere para la comunicación y la toma de decisiones en su vida diaria; o en lo relacionado al manejo financiero, salud y demás aspectos relevantes, en caso de que la persona se encuentre imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio.

c) Los ajustes que la persona requiera para participar activamente en el proceso.

d) Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía e independencia en las mismas.

e) Las personas que han fungido o pueden fungir como apoyo en la toma de decisiones de la persona, para cada aspecto relevante de su vida.

f) Un informe sobre el proyecto de vida de la persona.

g) La aprobación de la valoración de apoyos por parte de la persona bajo medida de interdicción o inhabilidad. En aquellos casos en que la persona bajo medida de interdicción o inhabilidad se encuentre imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio posible, le corresponderá al juez aprobar dicha valoración de apoyos.

3. La relación de confianza entre las personas bajo medida de interdicción o inhabilidad y la o las personas que serán designadas para prestar apoyo en la celebración de actos jurídicos.

4. Las demás pruebas que el juez estime conveniente decretar.

5. Una vez vencido el término para la práctica de pruebas, el juez escuchará a los citados y verificará si tienen alguna objeción. Posteriormente, el juez procederá a dictar sentencia de adjudicación judicial de apoyos, la cual deberá:

a) Hacer claridad frente a la adjudicación de apoyos en relación con los distintos tipos de actos jurídicos.

b) Designar la o las personas de apoyo y sus respectivas funciones para asegurar el respeto a la voluntad y preferencias de la persona.

c) Oficiar a la Oficina de Registro del Estado Civil para que anule la sentencia de interdicción o inhabilitación del registro civil.

d) Emitir sentencia en lectura fácil para la persona con discapacidad inmersa en el proceso, explicando lo resuelto.

e) Ordenar la notificación al público por aviso que se insertará una vez por lo menos en un diario de amplia circulación nacional, señalado por el juez.

f) Ordenar los programas de acompañamiento a las familias, en el caso de que resulten pertinentes.

g) Disponer las demás medidas que el juez considere necesarias para asegurar la autonomía y respeto a la voluntad y preferencias de la persona, en particular aquellas relacionadas con el manejo de patrimonio que se hubiesen establecido en la sentencia de interdicción sujeta a revisión.

PARÁGRAFO 1o. En caso de que el juez considere que las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación no requieren de la adjudicación judicial de apoyos, la sentencia deberá consignar esta determinación y los motivos que la fundamentan.

Asimismo, oficiará a la Oficina de Registro del Estado civil para que anule la sentencia de interdicción o inhabilitación del registro civil correspondiente. Una vez la sentencia se encuentre en firme, las personas quedarán habilitadas para acceder a cualquiera de los mecanismos de apoyo contemplados en la presente ley.

PARÁGRAFO 2o. *Las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación anterior a la promulgación de la presente Ley, se entenderán como personas con capacidad legal plena cuando la sentencia del proceso de revisión de la interdicción o de la inhabilitación quede ejecutoriada.*

Con este marco normativo, procederemos a analizar el caso en concreto.

PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE

Obran en el proceso las siguientes pruebas:

Copia del expediente digital del proceso de interdicción de **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA**, del cual se puede extraer que fue declarada en interdicción por discapacidad mental absoluta mediante la sentencia del 20 de mayo de 2011, y se designó como su guardadora legítima a tía **MYRIAM BONILLA DE BONILLA**.

En audiencia celebrada de manera virtual el 23 de mayo de 2022, se escuchó a la señora **MARTHA LILIANA MACHUCA BONILLA** y a su **guardadora MYRIAM BONILLA FAJARDO**. En esa misma diligencia se le solicitó a la guardadora allegar al despacho y antes de la siguiente audiencia, la relación de los gastos mensuales de la señora SANDRA LILIANA con sus respectivos soportes, documentación que no fue allegada.

Interrogatorio MARTHA LILIANA MACHUCA BONILLA (archivo digital No 21y

Manifiesta que, es amada de casa y sus estudios son de bachiller, que actualmente vive con su esposo desde hace tres años que su señora madre tenía un casa y un apartamento y un carro y que el apartamento lo vendió y el carro lo tenía su hermana y después se lo entregaron a su hija mayor, que su madre la señora Juana dejó una pensión de 6 millones de pesos y había un retroactivo de Colpensiones \$280 millones de los cuales quedan \$165.000.000, que no sabe dónde están y sugiere que se le pregunte a su Tia la señora Miriam quien fue quien la administro, también indica que en la actualidad solo recibe \$3 millones porque le descuentan \$2.900.000 y que ese dinero se lo consignan a su Tia y ella lo administra, que los beneficiarios de esa pensión solo era ella, que sus hijas tienen 23 y 16 años, en ampliación de interrogatorio reitera que desde hace poco mas de 3 años vive con su esposo y su hija en la ciudad de santa marta, que su hija depende económicamente de ella y que su oficio es de ama de casa, que su esposo es la persona que la acompaña y le ayuda y que la persona que le colabora en todos los aspectos económicos es MARTHA CECILIA, para los temas médicos la acompaña su esposo, que maneja dinero cosas de pagar en tiendas o para comprar cosas mínimas y que antes de todo ella pregunta en la caja y paga, que los gastos de su hija los paga ella y que su esposo estaba trabajando independiente vendiendo y arreglando celulares, que se encuentra a gusto con el manejo y la ayuda que le presenta MARTHA CECILIA ya que ella está pendiente, que la otra hija mayor juanita Alejandra también la acompaña en ocasiones, aunque su hija vive en Yopal, que también su cuñado Luis Jose le puede colaborar.

INTERROGATORIO MIRIAM BONILLA (ARCHIVO DIGITAL No 21)

Indica que, es bachiller y que vive sola que es divorciada y vive en su apartamento y sus hijos están pendientes de ella, que en este momento la pensión que se recibe es de \$ 3.000.000, que antes que saliera la pensión y que no le puede enviar todo el

dinero por que tiene una discapacidad mental absoluta y que la pareja actual de MARTHA LILIANA la hizo salir de la prepagada, que le envía bonos de alimentación por \$1.000.000, que a veces se le envía más, el excedente se le envía semanalmente y útiles de aseo y aparte de lo que ella necesita y a la hija de ella se le envían \$500.000 para arriendo y algo de comida, y que durante 7 meses le entregaron el dinero directamente de Colpensiones y que la señora Juana solo dejó un carro y nada mas y que en la contabilidad están todos los recibos de los gastos.

Testimonio **MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR**

Señaló que es licenciada en primera infancia, trabaja en pedagogía infantil con el ICBF, y actualmente es la cuñada de MARTHA LILIANA. Vive relativamente cerca, los separa unos tres barrios en Santa Marta. Dijo que comparte con frecuencia con Sandra Liliana, en las tardes visita a SANDRA, la acompaña a hacer las compras, y está pendiente de ella, en ocasiones le ha manejado el dinero. Manifestó que está dispuesta a apoyar a Sandra Liliana en todo lo que necesita, y está dispuesta en ser el apoyo de Sandra. En ocasiones ha observado que Sandra Liliana ha manejado dinero. Indicó que la relación de Sandra y Daniel es buena, tiene entendido que trabaja con teléfonos y ha observado que lleva cosas a la casa. Dijo que no estuvo presente al momento en el que Sandra solicitó un crédito. Dijo que la guardadora no ha cumplido con el deber de cuidar a Sandra, puesto que le mandaba bonos, y en un momento que ella quería arreglarse el cabello no le quiso enviar dinero y tuvo que enviarle fotos para que le creyera, además no ha velado por su cuidado porque cuando Sandra se ha enfermado ha sido ella quien la ha cuidado. No conoce a la tía de Sandra personalmente pero si ha estado presente en las discusiones entre Sandra y su tía telefónicamente cuando Sandra le ha pedido dinero para lo que necesita y la tía se lo ha negado.

Testimonio de **LUIS JOSE GUERRERO MORENO:**

Informó que es ingeniero de sistemas y quiropráctico. Dijo que Daniel Samuel es su hermano y Sandra Liliana su cuñada, no se ven con tanta frecuencia porque viaja bastante y se ve cada mes o 45 días con su hermano y Sandra. Ha compartido fiestas, paseos, idas a la playa, y también la ha acompañado en ocasiones mercado, pero realmente el que siempre la acompaña al médico y a todo lo que ella necesita es su hermano Daniel. Dijo que estaría dispuesto a acompañar a su cuñada en lo que necesite. Señaló que en su concepto Sandra Liliana no necesita que nadie le maneje el dinero porque ella lo sabe, ella no despilfarra el dinero, sabe cuáles son sus prioridades. Tiene conocimiento que la tía de Sandra le mandaba un bono pero no le envía dinero como si la única necesidad de Sandra fuera la comida y no tuviera otras necesidades. En algunas ocasiones le tocó ayudarla haciéndole un canje del bono por dinero porque la señora Miriam no le enviaba dinero sino bonos para mercado. No tiene conocimiento de cuánto es su mesada pensional. Dijo que no tiene conocimiento del préstamo que hizo Sandra Liliana.

Obra la valoración de apoyos realizada el 10 de julio de 2022 por la Defensoría del pueblo (archivo digital No. 36).

ANÁLISIS DEL DESPACHO

Obra la valoración de apoyos realizada por la Defensoría del Pueblo a la señora SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA en la que se indicó en resumen que:

Se concluye que una vez realizada la valoración formal por los por los profesionales adscritos en la defensoría del pueblo, que la persona titular del acto jurídico de la señora SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA identificada con cedula de ciudadanía N°52.087.242, puede expresar y darse a entender por medio del habla, no se

encuentra en imposibilidad para manifestar su voluntad, preferencias, y que requiere de la adjudicación de apoyos, para garantizar el derecho, el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de ciertos actos jurídicos para garantizar sus derechos.

Se informa que Las personas que pueden actuar como apoyo en la toma de decisiones del titular del acto jurídico, de la Señora SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA identificada con cedula de ciudadanía N°52.087.242, frente al acto o actos jurídicos concretos que se relacionan también y que son objeto del proceso de la referencia son las siguientes:

PERSONAS QUE PUEDEN ACTUAR COMO APOYO		
NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	VINCULO- PARENTESCO
DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO	CC. 80.075.409	COMPAÑERO PERMANENTE
LUIS JOSÉ GUERRERO MORENO	CC 7.144.255	CUÑADO
MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR	CC. 32.355.436	CONCUÑADA

En el informe de valoración de apoyos se indica que SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA necesita apoyos para la toma de las siguientes decisiones:

APOYOS PARA LA TOMA DE DECISIONES		
Decisiones para las que se requieren el sistema de apoyos	1. Representación judicial 2. Representación trámites administrativos 3. Administración del dinero y de los bienes 4. Representación para asistencia médica 5. Comunicación 6. Autodeterminación	
DEFINICIÓN DEL APOYO	DESCRIPCIÓN DEL APOYO	PERSONA DE APOYO
Representación judicial	1. representación en todos los trámites relacionados con el acceso a la justicia. A fin garantizar el derecho a la familia, protección y cuidado de la citada señora 2. Otorgar poder para representación en procesos judiciales para garantizar sus derechos, de tipo personal o patrimonial.	DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO
Representación trámites administrativos	1. Trámites administrativos, ante entidades públicas o privadas, para dar cumplimiento fallos judiciales, o realizar diligencias para garantizar sus derechos.	DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO
Administración del dinero y de los bienes	1. Apertura y manejo de la cuenta bancaria ante entidad financiera. 2. Uso de tarjeta débito, o el medio que el banco disponga para la disposición del dinero, y administración de productos financieros 3. Operaciones básicas de compra y pagos de productos o servicios para satisfacer sus necesidades.LUIS JOSÉ GUERRERO MORENO	MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR
Representación asistencia médica	1. Diligencias médicas que se requieran para salvaguardar la salud y garantizar los tratamientos médicos necesarios, medicina y atención integral, para su beneficio y tramitar afiliaciones. 2. Toma de decisiones de tratamientos médicos que garanticen la vida, la integridad y la salud del paciente y rehabilitación.	DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO
Comunicación	1. Acompañamiento para asegurar comprensión y expresión con terceros.	DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO

Autodeterminación	1. Le asista en la manifestación de la voluntad y preferencias personales, para ello debe interpretar la voluntad y preferencias del titular del acto jurídico.	DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO
-------------------	---	--------------------------------

Con la valoración realizada se logró determinar que, con el diagnóstico psicológico de La Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Santa Marta, en junio de 2022, Sandra Liliana presentó en el momento del nacimiento Hipoxia fetal, la cual dejó secuelas cognitivas con retraso mental leve, psicomotor y retraso del lenguaje, así como dificultades de aprendizaje, mental e intelectual.

Se reseñó que Sandra Liliana no está absolutamente imposibilitada para tomar decisiones, lo que requiere es apoyo y acompañamiento en especial para el manejo del dinero, y acciones que impliquen raciocinio complejo y/o de pensamiento o memoria, así como de trámites bancarios, finanzas, contratos, o trámites legales debido a la presencia de retardo mental leve y dificultades en el aprendizaje.

Igualmente, en el informe se indica que La posible amenaza a los derechos de Sandra Liliana Machuca Bonilla radica en las limitaciones cognitivas para el manejo del dinero o tramites financieros o legales, debido a la presencia de retraso de aprendizaje y dificultades para realizar aspectos de raciocinio o de pensamiento lógico.

Finalmente, la personería hizo una relación de los actos jurídicos que necesitan apoyo o representación, señalando a LUIS JOSE GUERRERO MORENO (cuñado), MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR (cuñada) y a DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO (compañero permanente) como responsables

Respecto a:

PATRIMONIO Y MANEJO DEL DINERO:

Apoyo para poder administrar y ejecutar, los recursos económicos provenientes de la Sustitución Pensional de la pensión de sobrevivientes.

PERSONA DE APOYO: LUIS JOSE GUERRERO MORENO (cuñado), MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR (cuñada)

FAMILIA, CUIDADO Y VIVIENDA:

Acompañamiento mediante red de apoyo familiar, comprensión, cuidado y protección.

PERSONA DE APOYO: DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO (compañero permanente)

SALUD:

Acompañamiento para el manejo y procesos relacionados con la garantía de la salud.

PERSONA DE APOYO: DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO (compañero permanente)

TRABAJO Y GENERACION DE INGRESOS

Acompañamiento para interpretación de actos administrativos. Así como contables.

PERSONA DE APOYO: LUIS JOSE GUERRERO MORENO (cuñado), MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR (cuñada)

ACCESO A LA JUSTICIA, PARTICIPACIÓN Y EJERCICIO DEL VOTO

Es necesario que su compañero DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO Sirva de apoyo para que la represente en todos los trámites relacionados con el acceso a la justicia. Como a su vez Trámites relacionados con la salud ante la EPS) a fin garantizar el derecho a la familia, protección y cuidado que la citada necesita diariamente

PERSONA DE APOYO: DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO (compañero permanente)

De acuerdo con la anterior valoración de apoyos, y a las pruebas legalmente arrojadas al proceso, se observa que la condición de salud de SANDRA LILIANA si bien puede expresar su voluntad y preferencias, requiere de diferentes apoyos para expresarlos y para hacer exigibles sus derechos.

Por lo tanto, es necesario designar algunos apoyos para que SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA pueda dar a conocer su voluntad respecto a la toma de decisiones y manejo del dinero, lo que hacen imperativa la designación de persona de apoyo que pueda garantizar el goce efectivo de los derechos de **SANDRA LILIANA**, asegurando su pleno bienestar físico, la atención y cuidados que necesita, la exigibilidad de sus derechos de salud y económicos y el manejo adecuado de su patrimonio.

Así, adecuándose el caso a las específicas disposiciones del artículo 56 de la Ley 1996 de 2019, se procederá a designar como **APOYO JUDICIAL** a sus cuñados LUIS JOSE GUERRERO MORENO (cuñado), MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR (cuñada) y a su compañero permanente DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO, por ser las personas que, según las pruebas documentales, la valoración de apoyo realizada, y las pruebas testimoniales practicadas de las cuales se puede concluir que LA VOLUNTAD Y PREFERENCIAS DE SANDRA LILIANA, son las personas más cercanas a ella en el afecto y en la confianza, hecho que se pudo evidenciar en la audiencia presencial que se adelantó.

En efecto, del material probatorio se encontró que SANDRA LILIANA puede expresar sus preferencias, lleva una vida familiar normal en compañía de su actual compañero sentimental DANNIER SAMUEL GUERRERO y con el apoyo de su familia extensa más cercana como lo es su hija y sus cuñados, especialmente de MARTHA LILIANA, quien la apoya y le ayuda en el manejo del dinero, que, al parecer, es lo único que le preocupa a su actual guardadora, toda vez que, no se encontró en ella, la señora MIRYAM, una relación cercana con su sobrina, tampoco que se interesara por su bienestar y su salud, y cuando nos referimos al bienestar no es solo lo económico de lo que valga la pena destacar quedan demasiadas dudas de su manejo pues al momento de este fallo no se aportó la relación de cuentas solicitada a la guardadora y los recibos que tanto dijo tenía de soporte de lo que le entregaba mensualmente a SANDRA LILIANA, sino también su estabilidad emocional, su salud y el apoyo que requiere para su proyecto de vida, situación que resulta totalmente ajena a la señora MYRIAM.

En efecto la tía materna y actual guardadora MYRIAM BONILLA FAJARDO, no resulta ser para SANDRA LILIANA una persona de confianza, pues la misma SANDRA ha solicitado su relevo al sentirse maltratada psicológica y económicamente,

manifestación que concuerda con lo reseñado en la valoración de apoyos de la defensoría del pueblo.

Debe destacarse que la Agente del Ministerio Público se encuentra de acuerdo con el resultado de la valoración de apoyos y con la designación de los señores LUIS JOSE GUERRERO MORENO (cuñado), MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR (cuñada) y DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO.

Por lo anterior, a juicio de este despacho existe entre SANDRA LILIANA y las personas identificadas por la defensoría del pueblo la cercanía, confianza y vínculo afectivo necesario para garantizar el respeto y protección de los derechos de **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA**.

Teniendo en cuenta que la norma en mención impone la obligación de determinar el alcance y duración de esta designación, se establece que, dadas las condiciones de discapacidad de **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA y la valoración de apoyos**, la designación de Apoyo Judicial se hace para los aspectos anteriormente relacionados.

Así mismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1996 de 2019 se designará el **APOYO JUDICIAL POR 3 AÑOS**.

Por último se deja constancia que el señor **DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO**, a pesar de estar debidamente notificado de la audiencia de recepción de pruebas no compareció, ni presencial ni virtualmente.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**,

RESUELVE

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia de interdicción por discapacidad mental absoluta proferida por este despacho el 20 de mayo de 2011 que declaró en interdicción a **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA**.

SEGUNDO: ORDENAR Oficiar a la Oficina de Registro del Estado Civil para que anule la anotación de la sentencia de interdicción o inhabilitación del registro civil de nacimiento de **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA**, lo anterior de conformidad con el literal C del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 1996 de 2019. **Secretaría proceda de conformidad.**

TERCERO: DECLARAR que en este caso se hace indispensable la designación de persona de **APOYO JUDICIAL** en favor de **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA**, identificada con cédula de ciudadanía 52.087.242, para garantizar el goce efectivo de sus derechos y su plena protección legal.

CUARTO: DECLARAR que **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA**, identificada con cédula de ciudadanía 52.087.242 **REQUIERE APOYO PARA LOS SIGUIENTES ACTOS JURÍDICOS:**

PATRIMONIO Y MANEJO DEL DINERO:

Apoyo para poder administrar y ejecutar, los recursos económicos provenientes de la Sustitución Pensional de la pensión de sobrevivientes.

PERSONA DE APOYO: MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR (cuñada) y LUIS JOSE

GUERRERO MORENO (cuñado),

FAMILIA, CUIDADO Y VIVIENDA:

Acompañamiento mediante red de apoyo familiar, comprensión, cuidado y protección.

PERSONA DE APOYO: DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO (compañero permanente)

SALUD:

Acompañamiento para el manejo y procesos relacionados con la garantía de la salud.

PERSONA DE APOYO: DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO (compañero permanente).

TRABAJO Y GENERACION DE INGRESOS

Acompañamiento para interpretación de actos administrativos. Así como contables.

PERSONA DE APOYO: LUIS JOSE GUERRERO MORENO (cuñado), MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR (cuñada).

ACCESO A LA JUSTICIA, PARTICIPACIÓN Y EJERCICIO DEL VOTO

Es necesario que su compañero **DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO** Sirva de apoyo para que la represente en todos los trámites relacionados con el acceso a la justicia. Como a su vez Trámites relacionados con la salud ante la EPS) a fin garantizar el derecho a la familia, protección y cuidado que la citada necesita diariamente.

PERSONA DE APOYO: DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO (compañero permanente)

QUINTO: En consecuencia, se designa como **APOYO JUDICIAL** de **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA**, a los señores LUIS JOSE GUERRERO MORENO (cuñado), MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR (cuñada) y DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO (compañero permanente) para que adelanten los actos jurídicos relacionados en el numeral cuarto de esta providencia.

SEXTO: SALVAGUARDIAS:

4.1.- No está permitido desmejorar la situación de cuidado de **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA**.

4.2.- Se ordena que las personas designadas como apoyo **RINDAN CUENTAS DE LA GESTIÓN** el día de la audiencia para la evaluación de desempeño del apoyo.

4.3.- **Se prohíbe la venta las propiedades** que le llegaren a corresponder a **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA**.

4.4.- Se prohíbe solicitar o tramitar préstamos en entidades bancarios o del sector financiero a nombre de la señora **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA**, los que cuales llegaran a causar un detrimento en la pensión que recibe. **OFÍCIESE a todas las entidades bancarias y a Colpensiones informándoles esta restricción. Secretaría**

tramite directamente los oficios.

SÉPTIMO: DELIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES: Los señores **LUIS JOSE GUERRERO MORENO** (cuñado), **MARTHA CECILIA MURILLO SALAZAR** (cuñada) y **DANNIER SAMUEL GUERRERO MORENO** (compañero permanente), únicamente podrán ejercer las funciones y actos jurídicos señalados en el numeral cuarto de esta providencia.

OCTAVO: DURACIÓN. De conformidad con el artículo 18 de la ley 1996 de 2019, y teniendo en cuenta las pruebas recaudadas en este caso, los apoyos aquí adjudicados tendrán una duración de 3 años.

NOVENO: De conformidad con el artículo 43 de la Ley 1996 de 2019, Cualquier actuación judicial relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado apoyos será de competencia de este juzgado.

DÉCIMO: AUTORIZAR la expedición de copia auténtica de la presente acta, por secretaría y a costa de las partes.

DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICAR al público, por aviso que se insertará una vez en un diario de amplia circulación nacional, como El Tiempo, el Nuevo Siglo o El Espectador. (literal e, numeral 5, artículo 56 de la Ley 1996 de 2019).

DÉCIMO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 56 de la Ley 1996 de 2019, ejecutoriada esta sentencia, **SANDRA LILIANA MACHUCA BONILLA** recobrará su capacidad legal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

El Juez,



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ